

II

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BUSTOS FIERRO

El proyecto responde a:

Los intereses de los menores, de sus familias y de la sociedad.

La opinión pública: Prédica periodística.

Los antecedentes históricos: Función judicial { Ley orgánica de los tribunales, 1.893
Ley de Patronato Nacional de Menores, 10.903

La opinión de los especialistas en la materia { Primera Conferencia Nacional sobre Infancia Abandonada y Delincuente (1933)
Segunda Conferencia Nacional sobre Infancia Abandonada y Delincuente (1942)
Comisión Nacional de Técnicos para el Estudio de los Problemas de la Minoridad (1945)
Primer Congreso Coordinador de la Provincia de Buenos Aires (1951)
Conclusiones del Centro Permanente de Estudios sobre Protección, Asistencia y Legislación de Menores, de la Facultad de Derecho (1948-1952)

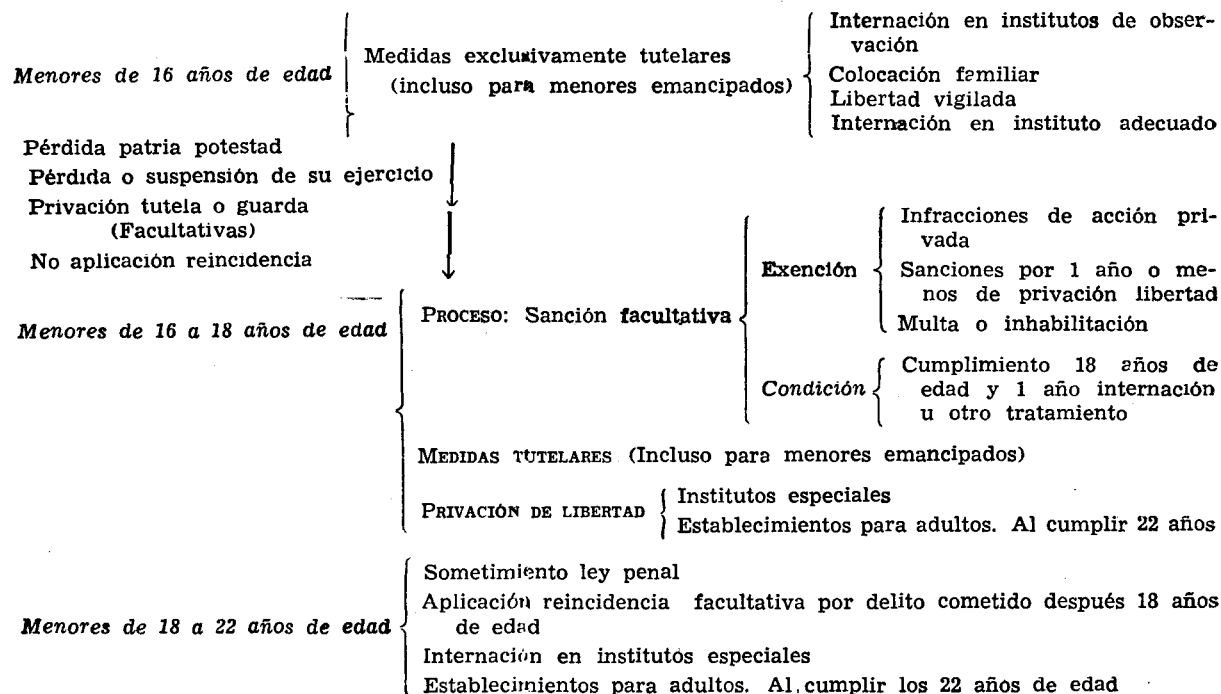
La opinión de los juristas { Primer Congreso Latinoamericano de Criminología (1938)
Primera Conferencia de Abogados (1943)

La tendencia jurisprudencial de los tribunales

Un imperativo legal { Constitución Nacional (artículo 37, apartado II, número 4): «La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.»

Los intereses políticos de gobierno: SEGUNDO PLAN QUENQUENAL (1952)

Del régimen de los menores incurso en hechos que la ley califica como delitos



MENORES

CODIGO PENAL

LEY 10.903

Artículo 36. — No es punible el menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente o de sus padres, tutores o guardadores resultara peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla dieciocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores.

Si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estada hasta que tuviere veintiún años.

Artículo 37. — Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de dieciocho, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito cometido tuviere pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección si fuese inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores o de otras personas.

El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintiún años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto;

- b) Si el delito tuviere pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Artículo 14. — Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional en la Capital de la República y en las provincias y territorios nacionales, ante quienes comparezca un menor de 18 años, acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores. A ese efecto, no regirán en los tribunales federales ordinarios de la Capital y de los territorios nacionales, las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que sólo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario, y se cumplirá dónde y cómo él mismo lo indique. Podrán también dejarlos a sus padres, tutores o guardadores, bajo la vigilancia del tribunal. La resolución judicial será susceptible de los recursos de revocación y apelación en las mismas condiciones prescritas en el artículo 19.

Artículo 15. — Los mismos jueces, cuando sobreesan provisoria o definitivamente respecto a un menor de 18 años, o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de 18 años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallare material o moralmente abandonado o en peligro moral, y en la misma forma establecida en el artículo anterior.

MENSAJE Y PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 1º — Cuando el menor que no ha cumplido dieciséis años de edad incurriere en un hecho que la ley califica como delito, la autoridad judicial competente procederá a comprobar el mismo, tomar conocimiento personal y directo del menor, sus padres, tutor o guardadores y ordenar los informes y peritaciones conducentes al estudio de la personalidad de aquél, sus condiciones familiares y el ambiente en que viviere. En caso de estimarlo necesario podrá disponer la internación del menor en un instituto de observación antes de resolver en definitiva. Esta medida durará tan solo el tiempo indispensable para su mejor examen y facilitar la ulterior adopción del régimen que correspondiera aplicar, conforme lo dispone el artículo siguiente.

Artículo 2º — Si las circunstancias del hecho y las condiciones personales del menor evidenciaren que éste no presenta problemas graves de conducta o ambientales, el juez podrá dejarlo con sus padres o tutor, libremente o bajo el régimen de libertad vigilada; podrá también dejarlo con sus guardadores o con otras personas idóneas, pero en estos casos se establecerá siempre un régimen de libertad vigilada apropiado.

Si el menor se hallare abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presentare graves problemas de conducta, el juez podrá disponer del mismo en alguna de las formas previstas en el párrafo anterior o proceder a su internación en un instituto adecuado.

Artículo 38.—El menor que no ha cumplido dieciocho años, no puede ser declarado reincidente.

Artículo 39.—En todos los casos de delito cometido por un menor, el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Podrá también disponer el cambio de guardadores. Para tomar esas medidas se tendrán en cuenta las situaciones respectivas del menor, sus padres, tutores o guardadores y lo que convenga al desenvolvimiento moral y educacional del primero.

Artículo 51. (Segunda parte).—

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido antes de haber cumplido veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena.

Artículo 16. — Los jueces correccionales en la justicia nacional de la Capital y en los territorios nacionales, entenderán en primera y única instancia, en todos los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores de 18 años y aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores.

Artículo 17. — Todo menor de que hayan dispuesto los jueces indicados en los tres artículos anteriores, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

Artículo 18. — Los mismos jueces en los procesos a que se refiere el artículo 14, podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho penal multas hasta la suma de \$ 200, o arresto hasta un mes, o ambas penas a la vez.

Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma, quedando prescritas en el plazo de dos años si no incurrieren en hechos de la misma naturaleza.

Artículo 19.— Los padres o tutores de los menores de quienes hayan dispuesto definitivamente los jueces de la jurisdicción criminal o correccional, o que hayan sido condenados en virtud del artículo anterior, podrán solicitar revocatoria de esas resoluciones dentro de cinco días de la notificación de las mismas. Esta oposición se substanciará en una audiencia verbal, con las pruebas que ordene el juez o indique el recurrente, si el juez las juzgare pertinentes.

La resolución será apelable en relación.

Artículo 3º — Cuando el menor de dieciséis a dieciocho años de edad, incurriere en un hecho que la ley como delito y no se tratase de infracciones de acción privada o sancionadas con un año o menos de privación de la libertad, con multa o con inhabilitación, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso. No obstante, cualquiera fuere la naturaleza del hecho, se procederá conforme lo disponen los artículos 1º y 2º.

Artículo 4º — Cuando el menor a que se refiere el artículo precedente haya cumplido dieciocho años de edad y por lo menos un año de internación u otro tratamiento tutelar, las autoridades competentes informarán al juez sobre su conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales.

Si de las conclusiones de ese informe, las modalidades del hecho y los antecedentes del menor, apareciese fundadamente necesario aplicarle una sanción, el juez así lo resolverá, conforme a la ley penal, pudiendo reducirla en la forma determinada para la tentativa.

También en estas circunstancias, el juez podrá proceder, en todos los casos, con arreglo a las demás facultades conferidas en los artículos 1º y 2º.

Artículo 5º — La sanción privativa de libertad que el juez impusiere se hará efectiva en institutos especiales; si en esta situación el infractor alcanzare los veintidós años de edad, será trasladado, para cumplir el resto de la sanción impuesta, a los establecimientos para adultos.

Artículo 6º — En todos los casos en que se advirtiere una anormalidad física, psicológica o mental en el menor, éste será sometido al tratamiento especial más adecuado.

Artículo 7º — En los casos en que un menor que no ha cumplido dieciocho años de edad, incurriere en un hecho que la ley califica como delito, el juez podrá declarar, según las circunstancias: la pérdida de la patria potestad, la pérdida o suspensión de su ejercicio, la privación de la tutela, o guarda a quienes la ejercieren, y disponer el régimen que corresponda.

Artículo 20. — Los tribunales de apelación en lo criminal y correccional de la justicia nacional ordinaria de la Capital y territorios nacionales, designarán, si lo juzgan conveniente, uno o más jueces para que entiendan exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones en los procesos en que se acuse a menores de 18 años; reglamentarán la forma de la cooperación policial en los sumarios e informaciones respectivas, la cooperación de los particulares o establecimientos particulares o públicos que se avengan a coadyuvar gratuitamente en la investigación y en la dirección y educación de los menores; así como también la forma de la vigilancia que corresponde a los jueces en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 17.

Artículo 21. — A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores o la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones, o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido dieciocho años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o en lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres, guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

Artículo 22. — El Poder Ejecutivo presentará el plan general para la construcción, en la Capital y en las provincias y territorios nacionales, de escuelas especiales para los menores expuestos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delincuentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley.

En estas escuelas y reformatorios regirá el trabajo de talleres y agrícola como principal elemento educativo de los menores reclusos, quienes serán parte en el beneficio pecuniario de esos trabajos.

Las colonias escuelas y las colonias reformatorios ubicados cerca de las ciudades o en pleno campo, serán el tipo preferido de estas casas de prevención y reforma de los menores.

Artículo 8º — El menor de dieciocho a veintidós años de edad, que infrinja las disposiciones de la ley penal, quedará sometido a ella. Si antes de cumplir los veintidós años debiera ser privado de su libertad, sea durante el proceso o a efectos de cumplir la sanción, será internado en institutos especiales y, hasta tanto sean debidamente organizados los mismos, en secciones especiales de establecimiento para mayores.

A partir de los veintidós años de edad, será trasladado a establecimientos comunes para adultos.

Artículo 9º — Cuando la acción correspondiente a un hecho que la ley califica como delito, cometido por un menor de dieciséis a dieciocho años, fuere iniciada después que el mismo alcanzó esta última edad, el juez procederá en las formas contempladas en los artículos 1º a 4º.

Pero si el inculpado fuere, al tiempo de su juzgamiento, mayor de veintidós años, no aplicará las medidas tutelares previstas en dichos artículos.

Artículo 10. — Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.

Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente.

Artículo 23. — Los asilos, escuelas primarias gratuitas, generales y especiales y particularmente las de práctica técnica, como los demás establecimientos de beneficencia privados, que reciban niños, subvencionados por el Estado están obligados a recibir en secciones que podrán ser especiales, un número determinado de menores, remitidos por los jueces en virtud de esta ley, de acuerdo con la subvención recibida, la naturaleza del establecimiento y la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 24. — Los parientes de los menores y las instituciones de beneficencia o de patronato de niños, podrán denunciar las transgresiones de esta ley, si se tratase de los jueces, a los cuerpos encargados de acusarlos o de juzgarlos, y si se tratase de los defensores o asesores de menores, a los funcionarios con facultad para controlarlos o removerlos.

Artículo 11. — La modificación, suspensión, cesación de las medidas tutelares, responderá a la mejor protección del menor.

A tales efectos el juez procederá, de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, debiendo informarse de la conducta, grado de adaptabilidad social, aptitud para el trabajo y demás circunstancias personales del menor, como así también de las condiciones de las personas que lo tienen o tendrán a su cargo y del ambiente en que vive o habrá de vivir.

Las medidas cesarán de pleno derecho con la mayoría de edad civil.

Artículo 12. — Las normas precedentes se aplicarán aun cuando el menor fuere emancipado por matrimonio o por otra causa legal.

Artículo 13. — Para el cumplimiento de la libertad vigilada o de las demás medidas tutelares, las autoridades judiciales de cualquier jurisdicción de la República prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal, aceptando la delegación que circunstancialmente se la haga de las respectivas funciones.

Las sanciones o medidas tutelares que se apliquen de acuerdo a las prescripciones indicadas, podrán hacerse efectivas en jurisdicción nacional, cuando así lo solicitaren las autoridades judiciales competentes.

Artículo 57. — La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogados los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal y todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

Lista de establecimientos para menores, existentes en el país

Capital Federal y Gran Buenos Aires

Casa de Admisión y Observación, Capital Federal.
 Hogar de Niños General José de San Martín, Capital Federal.
 Hogar Escuela Almafuerte, Capital Federal.
 Instituto José María Pizarro y Monje, Capital Federal.
 Instituto José Sánchez Picado, Capital Federal.
 Hogar Crescencia Boado de Garrigós, Capital Federal.
 Hogar Manuel Roca.
 Hogar Martín Rodríguez, Mercedes, Provincia de Buenos Aires.
 Instituto Angel T. de Alvear, Luján, Provincia de Buenos Aires.
 Hogar Estela Matilde Otamendi.
 Establecimiento Carlos Pellegrini, Pilar, Provincia de Buenos Aires.
 Establecimiento Los Arenales, Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires.
 Escuela Granja Santa Teresita, Boulogne, Provincia de Buenos Aires.
 Hogar 17 de Octubre, San Justo, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Hogar Juan D. Perón, Olivera, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
 Escuela Agrícola N. L. y M. O. Inchausti.
 Instituto de Readaptación Ramayón López Valdivieso, Jáuregui, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Cayetano Zibecchi, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Mariano Ortiz Basualdo, Las Armas, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Agrícola Rómulo Otamendi, Provincia de Buenos Aires.
 Colonia Agrícola Oscar Ferrari y Florencia A. de Ferrari, Provincia de Buenos Aires.

Además de estos establecimientos dependientes todos ellos de la Dirección de Menores de la Dirección Nacional de Asistencia Social, existen en la Capital y alrededores establecimientos particulares becados en los que también se reciben menores de uno y otro sexo. Estas becas son suministradas por la Cámara Nacional en lo Penal de los fondos asignados a ella por ley 10.093 y por la misma Dirección de Menores.

Esos establecimientos particulares becados son:

Amparo Maternal, Capital Federal.
 Hogar Escuela San José, Capital Federal.
 Hogar Escuela Granja Santa Teresita, Boulogne.
 Hogar Escuela Santa Celina, San Miguel, Provincia de Buenos Aires.
 Hogar Escuela San José, San Miguel, Provincia de Buenos Aires.
 Hogar Churruca, Provincia de Buenos Aires.
 Hogar Maglione, Provincia de Buenos Aires, y otros dos de la Casa del Niño. Cuatro establecimientos del Patronato de la Infancia.

Establecimientos hospitalarios y asistenciales especiales de la Dirección de Menores:

Casa Cuna Eva Perón, Capital Federal.
 Hospital de Niños, Capital Federal.
 Casa San Sebastián, Córdoba.

Estos establecimientos son usados por los Jueces de Menores de la Capital y en algunos de la Dirección de Menores se reciben niños y niñas enviados por jueces de las provincias y territorios.

La Policía Federal posee los siguientes establecimientos:

Instituto de Menores Varones, Capital Federal.
 Instituto El Retiro, Marcos Paz.
 Hogar Aguirre.
 Hogar Alberdi. Estos dos para niños de hasta 14 años, abandonados.
 Sección menores del Asilo Buen Pastor, en la Capital Federal.

TOTAL: 40 establecimientos. Estos datos son a la fecha actual, diciembre 1954. Estos establecimientos han sido tipificados en 1952.

Establecimientos de la provincia de Buenos Aires

Casa de Admisión Dardo Rocha.
 Casa de Admisión Joaquín V. González.
 Receptoría de Varones de Azul.
 Receptoría de Varones de San Nicolás.
 Receptoría de Varones de Mercedes.
 Receptoría de Varones de Bahía Blanca.
 Receptoría Femenina de Bahía Blanca.
 Receptoría Femenina de Dolores.
 Receptoría de Varones de Dolores.
 Hogar Estudiantil Bernardino Rivadavia.
 Hogar Estudiantil Santa María.
 Instituto Agustín R. Gambier.
 Instituto José M. Estrada.
 Instituto Almafuerte.
 Instituto Escuela de Músicos Julián Aguirre.
 Instituto Jorge Eduardo Coll.
 Instituto Domingo Faustino Sarmiento.
 Instituto Hogar de Niños Las Flores.
 Escuela Granja San Isidro.
 Instituto Martín Rodríguez.
 Instituto Senador Antonio Azcona.
 Instituto Saturnino E. Unzué.
 Jardín de Infantes Remedios Escalada de San Martín.
 Instituto Gobernador Marcelino Ugarte.
 Instituto Hogar Escuela de Niñas.
 Instituto Beata María Teresa Goretti.
 Instituto María Eufrasia Pelletier.
 Instituto San José.
 Instituto Hogar Materno Infantil.
 Instituto Hogar de Niñas de Ayacucho.
 Colonia de Vacaciones Palacio Piria.
 Casa del Niño Ricardo Gutiérrez.
 Casa del Niño Catalina Plaul de Farrell.
 Casa del Niño Colón e Internado Anexo.
 Casa del Niño Santa Teresita.
 Casa del Niño Carlos Pellegrini.
 Casa del Niño General Villegas.
 Casa del Niño General San Martín.
 Casa del Niño Carmen Nobrega de Avellaneda.
 Casa del Niño Virgencita del Pilar.
 Casa del Niño Bartolomé Mitre.
 Casa del Niño Juana Manzo.
 Casa del Niño General Belgrano.

Instituto de Rehabilitación del Niño Inválido, Adrogué.

Instituto Eva Perón, Chivilcoy.

Escuela de Mecánica Agraria, Chivilcoy.

Hogar San Antonio, Azul.

Hogar Sagrado Corazón, Azul.

Total: 48 establecimientos. Datos al mes de diciembre de 1954.

Provincia de Jujuy

Hogar Buen Pastor para mujeres, en la capital de la provincia.

Colonia y Granja del Alto del Comedero, a 6 kilómetros de la capital, para varones. Funcionará desde enero de 1955.

Provincia de La Rioja

Hogar Tutelar para Mujeres.

Hogar Tutelar para Menores Varones.

(Ambos en Dique Los Sauces.)

Provincia de San Juan

Casa Hogar de Readaptación de Menores, en Desamparados.

Colonia de Vacaciones, en Zonda.

Colonia de Mujeres, en Desamparados.

Provincia de Santiago del Estero

Secciones especiales en los institutos de reeducación de varones y mujeres de mayores.

Provincia de San Luis

Colonia Hogar Evita.

Hogar del Niño.

Hogar Buen Pastor.

(Estos tres en la capital.)

Cárcel Correccional en Villa Mercedes, Sección Especial.

Escuela de Readaptación de la Dirección de Psicología Educativa.

Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional.

Provincia de Entre Ríos

Hogar de Menores Mujeres Evita, Paraná.

Albergue de Menores Enrique Berduc, Paraná.

Albergue de Menores General Francisco Ramírez, Paraná.

Escuela Hogar Nº 1 Pedro Scalabrini, Paraná.

Escuela Hogar Nº 2 Alejandro Carbó, Paraná.

Escuela Hogar Nº 3 José Zubiaur, Paraná.

Escuela Hogar Nº 4 Leopoldo Herrera, Paraná.

Colonia de Menores Roque Sáenz Peña, Viale.

Escuela de Oficios Rurales General Urquiza, Villaguay.

Albergue de Menores Juan Perón, Concordia.

Albergue de Menores General San Martín, Victoria.

Instituto Tutelar de Menores, Gualaguaychú.

Hogar de Niñas La Caridad, Gualaguaychú.

Todos estos son establecimientos oficiales de la Dirección de Asistencia de Menores del Ministerio de Educación de la Provincia.

Los siguientes son establecimientos privados sometidos a la superintendencia de la Dirección de Asistencia de Menores.

Total: 25 establecimientos al mes de diciembre de 1954.

Entre Ríos, particulares:

Instituto Remedios de Escalada de San Martín, Concepción del Uruguay.

Hogar Nuestra Señora de la Merced, Paraná.

Hogar Bernardino Rivadavia, Paraná.

Hogar San Antonio, Paraná.

Hogar Cristo Redentor, Paraná.

Hogar La Providencia, Paraná.

Hogar del Niño, Paraná.

Colegio Hogar La Inmaculada, Villaguay.

Hogar San José, Federación.

Hogar Escuela Justo José de Urquiza, Victoria.

Asilo de Huérfanas del Sagrado Corazón, Victoria.

Colegio Hogar. Depto. de Paraná, Estación Seguí.

Escuela Hogar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Rosario de Tala.

Hogar Sagrado Corazón, Gualaguaychú.

Instituto Cristo Rey, Concepción del Uruguay.

Hogar Sagrado Corazón de Jesús, Concepción del Uruguay.

Hogar Castro Barros San José, Nogoyá.

Hogar de Menores San José, Gualaguay.

Hogar Escuela San Juan Bosco, Gualaguay.

Hogar San José, Colón.

Instituto Incorporado Sagrado Corazón, Est. Crespo.

Asilo de Artes y Oficios Rogelio Martínez, Villaguay.

Hogar de Menores San José, Concordia.

Hogar La Providencia, Concordia.

Provincia de Corrientes

Granja Hogar General San Martín, Kilómetro 14, avenida Maipú de la capital de la provincia.

Hogar Buen Pastor, en la misma capital.

Provincia Presidente Perón

Secciones especiales en la cárcel común.

Provincia Eva Perón

Secciones especiales en establecimientos de mayores y remisión a establecimientos nacionales.

Provincia de Misiones

Granja para varones en Villa Urquiza, planta suburbana de Posadas.

Hogar de Mujeres, calle Catamarca, Posadas.

Provincia de Salta

Secciones especiales en establecimientos para mayores.

Provincia de Mendoza

Colonia Hogar 25 de Mayo, Villa 25 de Mayo, San Rafael.

Colonia Hogar 9 de Julio, Villa Agrelo, Luján.

Alcaldía 12 de Octubre, Las Heras.

Hogar Nº 1 Mayor Drummond, Luján.

Hogar Nº 2 para la menor madre, Luján.

Hogar Nº 3, Niñas, Luján.

Amparo infantil, Luján.

Hogar 17 de Octubre, Luján.
Casa Cuna, Capital.
Hogar Monseñor José Orzali, Capital.
Hogar de Tránsito, Capital.
Madre Obrera Nº 1 y Nº 2, en la Capital.
Madre Obrera Nº 3, en Las Heras.
Madre Obrera Nº 4, en Maipú.
Madre Obrera Nº 5, en San Rafael.

Estos últimos son solamente para niños de tres a seis años que no pueden quedar a cuidado de otras personas mientras la madre trabaja.

Total: 44 establecimientos al mes de diciembre de 1954.

Provincia de Santa Fe
(Datos de 1944)

Escuela Granja San Isidro.
Escuela de Artes y Oficios en Ceres.
Escuela Hogar en San Genaro Norte.
Escuela de Oficios para Varones en Moisés Ville.
Escuela de Mecánica en Rufino.
Escuela Hogar en Rosario.

Provincia de Córdoba
(Datos de 1944)

Asilo de Menores Varones, Capital.
Sección especial en la Cárcel de Encausados de la Capital.

Colonia Hogar Dalmacio Vélez Sársfield.
Casa del Niño en San Francisco.
Escuela Hogar José María Arias Moreno en Champaquí, San Javier.

Provincia de Tucumán

Se carece de datos.

Territorio de Neuquén
(Datos de 1944)

Granja Hogar Ceferino Namuncurá.

Resumen general

Datos de 1954 157 establecimientos.

Datos de 1944 12 establecimientos.

Total general

169 establecimientos.

De estos 169 en realidad solamente 136 pueden conceptuarse como típicos establecimientos asistenciales para menores dispuestos por el Poder Judicial. Los demás son asistenciales mixtos, pudiendo recibir a los menores dispuestos por los jueces pero presentándose reacios a ello. En este sentido habría que agregar todos los establecimientos de la Fundación Eva Perón, numerosos y bien organizados, que, generalmente, sin embargo, no reciben menores dispuestos por los tribunales.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA DEGLUOMINI DE PARODI

Proyecto de ley presentado en la sesión de la Honorable Cámara del día 19 de mayo de 1949

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Deróganse los artículos 64/83 de la ley de matrimonio civil contenidos en los artículos 9º, 10 y 11 del título I, sección 2, del Código Civil, que serán substituídos por las siguientes disposiciones:

De la disolución del matrimonio

Art. 2º—El matrimonio se disuelve:

- 1º Por muerte de uno de los cónyuges;
- 2º Por divorcio.

Art. 3º—El divorcio puede pedirse:

- 1º Por mutuo consentimiento de los esposos;
- 2º Por voluntad de cualquiera de los cónyuges;
- 3º Por las causales especificadas en esta ley.

Art. 4º—Es causa de divorcio:

- 1º Adulterio u otro acto carnal de naturaleza semejante con personas de cualquier sexo;
- 2º Bigamia;
- 3º Atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos comunes o ascendientes o descendientes de uno de ellos, como autor o partícipe;
- 4º Tentativa del marido para prostituir a su mujer y la de cualquiera de los cónyuges para corromper a sus hijos y la connivencia en su corrupción o prostitución;
- 5º La sevicia y las injurias graves;

6º Los malos tratamientos, aunque no sean graves cuando sean tan frecuentes que hagan intolerable la vida conyugal;

7º Estado habitual de embriaguez o de intoxicación por estupefacientes;

8º Condena definitiva por delito contra la honestidad o las costumbres, conforme al Código Penal o leyes especiales;

9º Abandono voluntario y malicioso del hogar;

10. Ausencia con presunción de fallecimiento.

De la acción de divorcio

Art. 5º—La acción de divorcio sólo puede ser iniciada por los cónyuges y es irrenunciable.

Art. 6º—La acción de divorcio fundada en las causales del artículo 4º, prescribirá, siempre que los cónyuges hayan continuado viviendo bajo el mismo techo, a los seis meses desde que se produjo o se tuvo conocimiento del último hecho que hubiera permitido deducirla.

Art. 7º—La acción de divorcio debe entablarse ante el juez del domicilio conyugal.

Art. 8º—El ministerio público es parte necesaria en todos los juicios que se inicien por esta ley.

Art. 9º—Toda clase de pruebas es admisible, excepto la testimonial de ascendientes o descendientes legítimos o naturales de cualquiera de los cónyuges. La prueba se apreciará conforme a las reglas contenidas en los códigos procesales del lugar del juicio.

Art. 10.—El juez de la causa deberá, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado, decretar una audiencia de conciliación que se llevará a cabo con la asistencia personal de las partes.

Art. 11. — Las acciones iniciadas quedan sin efecto si hay reconciliación de los cónyuges. El juez dispondrá el archivo de las actuaciones y las partes no podrán reproducir el juicio invocando los mismos hechos en que fundaron la acción.

Art. 12. — No podrá desecharse la acción de divorcio o separación personal instaurada por un cónyuge fundado en que el otro ha incurrido en hechos que constituyen también causas de divorcio.

Art. 13. — Los cónyuges podrán celebrar durante el juicio, como después de la sentencia, convenciones por escrito con respecto a sus bienes.

De la separación personal

Art. 14. — Los cónyuges pueden pedir la separación personal, fundados en las causales enumeradas en el artículo 4º de esta ley.

La separación personal no disuelve el vínculo matrimonial ni permite contraer nuevas nupcias, pero tiene los mismos efectos que el divorcio en cuanto a las personas, hijos y bienes de los cónyuges.

Art. 15. — Cualquiera de los cónyuges separados podrá, después de transcurridos dos años, pedir que la sentencia dictada se convierta en divorcio. La reconciliación deja sin efecto la acción y la sentencia de separación personal, y las partes no podrán reproducir el juicio invocando los mismos hechos que fundaron la acción.

Del procedimiento

Art. 16. — Los juicios de divorcio fundados en causales especificadas en esta ley y de separación personal se tramitarán por el procedimiento que establecen los códigos procesales del lugar de la causa para el juicio ordinario. La demanda de divorcio puede ser reconvenida por la de acción de separación personal y ésta por aquella.

Art. 17. — El juicio de divorcio por mutuo consentimiento se regirá por las siguientes disposiciones:

Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante el juez en un mismo acto y manifestar su voluntad de divorciarse. El juez podrá reclamar de los comparecientes todas las explicaciones o informes relacionados con la vida conyugal y personal de los mismos, y comprobada su libre voluntad, propondrá los medios conciliatorios que crea oportuno. El juez podrá suspender la audiencia y diferirla por un término que no podrá exceder de los diez días. De todo lo actuado se labrará acta que será firmada por el juez y los comparecientes ante el actuario. A petición de ambas partes, formulada dentro de los diez días de tomada esa audiencia, el juez señalará otra nueva audiencia dentro de un plazo no menor de dos meses ni mayor de cuatro, para que concurren personalmente las partes a manifestar si persisten en su propósito de divorciarse.

Si los cónyuges comparecen personalmente y ratifican su voluntad de divorciarse, el juez decretará el divorcio dentro de los 10 días.

Siempre que ambos o alguno de los cónyuges dejare de concurrir a alguna de las audiencias o comparendos sin justificar su inasistencia, o no pidiera la audiencia de ratificación dentro del plazo señalado, se lo tendrá por desistido del juicio y el juez dispondrá el archivo de las actuaciones.

Art. 18. — El juicio de divorcio por voluntad de uno de los cónyuges se tramitará por las siguientes disposiciones:

El cónyuge que solicite el divorcio deberá comparecer personalmente ante el juez a quien expondrá su voluntad de separarse. El juez podrá reclamarle todas las explicaciones e informes que considere conveniente, y verificada su libre voluntad, fijará una audiencia para celebrar el comparendo de los cónyuges dentro de los 10 días, labrándose acta que firmará el juez y el compareciente ante el actuario.

Si no comparece el otro cónyuge y no justificase su inasistencia, se tomará con la parte actora y si ésta persiste en su voluntad de divorciarse, o si compareciendo ambos, no se llegara a una reconciliación, el juez fijará una nueva audiencia a celebrarse en un plazo no menor de dos meses ni mayor de cuatro, y si celebrada esta audiencia, en la misma forma que la anterior, la parte que inicia el procedimiento persiste en su voluntad de divorciarse, el juez dictará sentencia decretando el divorcio, dentro de los 10 días, por voluntad unilateral. Si en la audiencia referida el otro cónyuge adhiere al pedido de divorcio, el juez decretará el divorcio por mutuo consentimiento. Si la parte que inicia el procedimiento dejare de concurrir, sin justificar su inasistencia, a cualquiera de estas audiencias, se lo tendrá por desistido y el juez dispondrá el archivo de las actuaciones.

De las disposiciones comunes a todos los juicios reglados por esta ley

Art. 19. — En tablada la acción de divorcio o separación personal, el juez podrá decretar todas o algunas de las siguientes medidas:

- 1º Separación personal provisoria de los esposos;
- 2º Depósito de la mujer menor de edad en casa honesta dentro de la jurisdicción del tribunal;
- 3º Determinará lo relativo a la tenencia y cuidado de los hijos menores, de acuerdo con esta ley y disposiciones del Código Civil;
- 4º Fijará la suma que ha de darse a la mujer, para alimentos propios y de los hijos que no quedaren en poder del padre;
- 5º Fijará la suma necesaria a favor de la mujer para las expensas del juicio;
- 6º Podrá practicar inventario de los bienes del matrimonio y adoptar medidas que garanticen la buena administración, pudiendo separar a cualquiera de ellos de la administración de los bienes gananciales o exigirle fianza bastante para que continúe administrándolos; embargo de los bienes necesarios para garantizar la parte que le corresponda al otro cónyuge en la liquidación de los bienes; prohibición de transferir a título oneroso o gratuito los bienes muebles o inmuebles gananciales o gravarlos con derechos reales, pero podrá autorizar tales operaciones con audiencia de la parte contraria y ministerios públicos.

El juez apreciará en cada caso la necesidad de dictar todas o algunas de las medidas enumeradas.

Efectos del divorcio en cuanto a la persona de los cónyuges

Art. 20. — Los cónyuges divorciados pueden contraer nuevo matrimonio, y si lo hicieren entre sí no podrán divorciarse nuevamente invocando los mismos hechos que dieron lugar a su divorcio anterior.

Art. 21. — La mujer divorciada no podrá contraer nuevas nupcias, a no ser que lo haga con su ex cónyuge, sino después de 10 meses contados a partir de la sentencia de divorcio. Si con anterioridad se hubiere decretado la separación provisional, dicho término se contará desde entonces, pero si hubiere quedado encinta podrá casarse después del alumbramiento.

Art. 22. — El marido puede contraer matrimonio después de dictada la sentencia de divorcio.

Art. 23. — La mujer divorciada tiene pleno derecho para realizar todos los actos de la vida civil.

Art. 24. — La mujer divorciada no puede usar el apellido del marido.

Art. 25. — La mujer divorciada no culpable tiene derecho a una pensión alimentaria independiente de la que corresponda a los hijos del matrimonio que estén en su poder o bajo su vigilancia inmediata. Esta pensión la fijará el juez teniendo en cuenta los recursos y las necesidades de ambos. La obligación de suministrar pensión se extingue cuando la mujer contrae nuevas nupcias, o toma órdenes religiosas, o tiene bienes suficientes, o lleva vida deshonesta.

El derecho a pensión alimentaria no rige cuando el divorcio se ha decretado por voluntad unilateral de la mujer o mutuo consentimiento.

Efectos del divorcio en cuanto a los hijos

Art. 26. — La tenencia de los hijos menores se substarará por el trámite que dispongan los códigos procesales del lugar de la causa para los juicios sumarios, por pieza separada, pudiendo promoverse juntamente con el juicio de divorcio o separación, pero sin perjuicio de las medidas provisorias que se disponen en el artículo 19, sólo se resolverá una vez dictada sentencia en aquél.

Los hijos menores de cinco años, salvo causas graves que se relacionen con la persona del menor, quedarán a cargo de la madre, y los mayores de esa edad se entregan al esposo que a juicio del juez resulte más conveniente para educarlos, sin que puedan alegar el marido ni la mujer preferente derecho a tenerlos.

El nuevo matrimonio del cónyuge a quien se dió la tenencia podrá ser causa para que se lo prive de ello, debiendo el juez preferir al cónyuge que permanezca sin contraer nuevo matrimonio, salvo motivos graves que se relacionen con la persona del menor.

La tenencia de los menores será confiada a uno de los cónyuges o distribuida entre ambos, pero el juez, si mediaren motivos graves, puede negarla. En tal caso optará por los parientes más próximos, en el orden establecido para la tutela y si ninguno de ellos reuniera condiciones para el gobierno de la persona del menor, podrá designar un tercero. En tales casos las obligaciones y derechos de los guardadores se rigen por lo dispuesto para la tutela. El juez podrá disponer la guarda de los menores en un establecimiento de enseñanza en relación con los recursos de los padres y en mira a la mejor educación de los menores.

Ninguna medida relativa a los menores podrá adoptarse sin audiencia de los padres y del Ministerio de Menores.

El esposo que por la sentencia tenga la tenencia de los hijos ejercerá la patria potestad.

Ambos cónyuges, contraigan o no nuevo matrimonio, quedan solidariamente obligados al sostén y edu-

cación de los hijos comunes. El juez fijará los alimentos de los menores que debe entregar uno o ambos cónyuges para su sostenimiento en poder del otro cónyuge o de un tercero o bajo la guarda del establecimiento educacional en que lo hubiere colocado el juez.

Efectos del divorcio en cuanto a los bienes

Art. 27. — Ejecutoriada la sentencia de divorcio podrá pedirse la separación de los bienes de la sociedad conyugal en los términos prescritos por el Código Civil para el caso de muerte de uno de los cónyuges.

Art. 28. — El cónyuge que no hubiere dado causa al divorcio podrá revocar las donaciones o ventajas que en el contrato de matrimonio hubiere hecho o prometido al otro cónyuge para tener efecto en vida o después de su fallecimiento y conservar en cambio las ventajas y donaciones que hubiere recibido o prometido de aquél en las mismas condiciones.

Art. 29. — Cuando el divorcio se decrete por voluntad de uno solo de los cónyuges, será considerado como culpable el cónyuge que lo pidió. Cuando se decrete por mutuo consentimiento, serán ambos considerados culpables.

Si el cónyuge inocente contrae nuevo matrimonio o toma órdenes religiosas, pierde las promesas que se le hubieren acordado en el contrato de matrimonio.

Art. 30. — Las disposiciones judiciales que se refieren a los bienes de la sociedad conyugal o a los bienes propios de los cónyuges, dictadas durante el juicio de divorcio o la sentencia anotada en el Registro de la Propiedad, tendrán efecto para perseguir de terceros los bienes enajenados en violación de dichas disposiciones judiciales, así como para asegurar al cónyuge inocente las promesas que se le hubieren acordado en el contrato de matrimonio para después de la muerte del otro cónyuge, quien, en tal carácter, concurrirá a la sucesión como acreedor.

Disposiciones transitorias

Art. 31. — En caso de sentencia ejecutoria con anterioridad a esta ley, cualquiera de los cónyuges puede pedir, en todo tiempo, la conversión de la sentencia de separación personal, en divorcio.

Art. 32. — Los divorcios pronunciados en el extranjero de matrimonios celebrados en la República con anterioridad a esta ley producirán sus efectos en el país, retroactivamente, considerándose las nuevas nupcias contraídas en el extranjero válidas aquí, desde que fueron celebradas y legitimándose los hijos nacidos de estos matrimonios que no lo estuvieren por la ley del país de su nacimiento.

Art. 33. — La presente ley queda incorporada al Código Civil en reemplazo de las disposiciones de la ley de matrimonio civil, que se derogan.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Agustín Rodríguez Araya. — Romeo E. Bonazzola. — Emir E. Mercader. — Raúl L. Uranga. — Juan J. Noriega. — Miguel Angel Zavala Ortiz. — Luis Dellepiane. — J. Anibal Dávila. — Orlanrio H. Cufre. — Mario Gil Flood.

Señor presidente:

El proyecto de ley de divorcio que someto a la consideración de vuestra honorabilidad, y que consiste en autorizar la extinción del vínculo, permitiendo a los cónyuges divorciados contraer nuevo

matrimonio, no es novedoso. Hace casi medio siglo, en el año 1902, el señor diputado Olivera presentó un proyecto de ley de divorcio conteniendo iguales principios, el que fué rechazado por el escaso margen de un solo voto, y desde entonces a la fecha, han sido numerosos los proyectos de ley de divorcio reproduciendo su contenido. Vale decir, desde hace medio siglo se mantiene siempre en actualidad y cabe reflexionar que ello, por sí solo, demuestra que existe la imperiosa necesidad de que la República dicte una verdadera ley de divorcio, ya que, para que el divorcio, como tantos problemas que polarizaron la atención de una época, hubiera quedado relegado a un tema del pasado, sería preciso admitir que ya no existen los motivos ni las situaciones que se procuraban solucionar, y esto no es cierto.

No se debaten aquí temas religiosos ni situaciones personales, porque el divorcio que se proyecta está referido exclusivamente al matrimonio civil y aborda, fuera de toda sensiblería, la solución de un candente problema de carácter social. Quiere decir que es ajeno por completo al vínculo religioso, resorte exclusivo de la Iglesia, como a las situaciones particulares, que están relegadas a lo íntimo de cada conciencia. Se trata, repito, de resolver un problema social y esta solución no puede hacerse generalizando la propia felicidad o desdicha que cada uno pueda haber encontrado en el matrimonio, sino verificando objetivamente un estado de cosas que se hace necesario encauzar dándole formas legales.

No haremos cifras, pues no se han hecho ni pueden hacerse estadísticas de los matrimonios desgraciados, ni de los adulterios u otras formas ocultas y vergonzosas de escapar de la tiranía de leyes vetustas, ni tampoco de la progenie adulterina impuesta por una legislación injusta.

Bástanos saber, para comprender la magnitud del problema, que se ha hecho una verdadera industria de los divorcios y matrimonios efectuados en el extranjero, en fraude de las leyes argentinas. En casi todos los diarios se leen avisos ofreciendo servicios profesionales para solucionar en el extranjero asuntos de familia. Esto quiere decir que el desprecio a la ley argentina vive ya en la conciencia de todos y que el fraude es aceptado y practicado. Nuestra actual legislación, antidivorcista, es una ley muerta, como todas las leyes que contrarían lo íntimo del sentir, que es lo que da vida a cualquier estructura social. Así es que los argentinos deben ir al extranjero a encontrar la solución que les niegan nuestras leyes.

Algo más; para salvar la infamante filiación adulterina con que estigmatizan a sus hijos nuestras leyes, los padres deben inscribirlos en el extranjero, con grave perjuicio para nuestra nacionalidad.

El proyecto de ley que presento a vuestra consideración contempla todos los aspectos del problema. Permite optar entre la simple separación personal y el divorcio absoluto. Mantiene así la separación de cuerpo y de bienes, sin ruptura del vínculo, dando acogida a aquellos que por sus creencias religiosas o principios particulares rechazan la extinción del vínculo, y en cambio, autoriza el divorcio permitiendo esta solución a aquellos que lo aceptan. Quiere decir que no se impone ni el divorcio ni la tesis antidivorcista en forma particular y excluyente; campea la libertad individual, pero se la encauza dentro de un sistema legal donde, contemplando la situación personal de los cónyuges, de los hijos del matrimonio

y de sus bienes, se da una solución a un problema típicamente social.

Finalmente debo recordar que no intentamos un ensayo en materia social ni menos improvisamos un sistema novedoso. El divorcio, con las características que contiene este proyecto, se encuentra probado por su larga experiencia en casi todos los países del mundo civilizado, donde con la sola salvedad de aquellos países en que se mantiene la influencia política del clero, está incorporado a su legislación.

Agustín Rodríguez Araya.

Proyecto de ley presentado en la sesión de la Honorable Cámara del día 21 de agosto de 1946

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º— Refórmase el artículo 7º de la ley de matrimonio civil y se lo substituye por el siguiente: «La disolución en país extranjero, de un matrimonio celebrado en la República Argentina, producirá en ésta todos los efectos jurídicos, con la sola excepción de que los cónyuges no podrán volver a casarse en la Argentina.»

Art. 2º— Comuníquese, etc.

Absalón Rojas.

Señor presidente:

La disolución en país extranjero, de matrimonios celebrados en la Argentina—casi siempre seguida de nuevo casamiento—constituye un problema que reclama, desde hace tiempo, la atención del Congreso.

Y cuando se piensa que de esos matrimonios—irregulares para nuestra ley—han nacido y siguen naciendo hijos—que están colocados en la denigrante situación de hijos adulterinos—ya no se reclama al Congreso solamente su preocupación sobre el problema, sino una solución urgente, impostergable.

Desde luego, no existen, ni podrían existir, estadísticas oficiales sobre el particular. Pero yo, por mis propios medios, he llegado a fijar cifras que reputo exactas. Seis son las oficinas más conocidas, establecidas en esta Capital, más una en Rosario, que se ocupan de esta clase de gestiones ante los Tribunales del Uruguay y de México. Incluyo en ellas la ya desaparecida de Francisco Gicé, fundada hace treinta años, hombre que se hizo notorio por esta clase de asuntos, así como también por su libre pensamiento a la manera finisecular, de un anticlericalismo hoy pasado de moda. Por datos que me han suministrado esas oficinas, puedo asegurar que hay aproximadamente unos ocho mil divorcios y subsiguientes matrimonios de argentinos celebrados en esas condiciones, siempre—naturalmente—en progresivo aumento. Eso me permite calcular la existencia de unos dieciséis mil hijos habidos de esas uniones irregulares—a dos hijos por matrimonio—teniendo en cuenta que frecuentemente son parejas jóvenes, en la edad apasionada en que se lleva todo por delante, lo que compensa, con creces, a las que resultaron estériles, por la edad o por precauciones comprensibles dada esa misma situación irregular ante nuestras leyes.

Y bien, si no fuera por los padres—que también merecen alguna contemplación legislativa en el error o en la culpa de su fracaso matrimonial—al menos por los hijos—parias en su propia tierra—es evi-

dente que el legislador debe considerar esta situación de una vez por todas y resolverla de alguna manera. La ley no vendría a crear, pues, un problema artificial. Desagrade o no, estamos frente a una realidad social que no se suprime con fingir ignorancia. Ahí están los hijos con su realidad de carne y hueso.

Porque, como dice Bertrand Russell en su obra *Vieja y Nueva Moral Sexual*, «de no ser por los hijos, no habría necesidad de institución alguna concerniente al sexo; sus necesidades y satisfacciones serían sin trascendencia como la de otros instintos, pero en cuanto los hijos aparecen, el marido y la mujer contemplan forzosamente —a poco sentido de la responsabilidad que posean y a poco amor que profesen a la descendencia— que los sentimientos del uno para el otro, que ellos mismos, los padres, han dejado de ser lo importante.»

La solución es sin embargo tan sencilla, que sólo consiste en introducir una simple modificación de palabras en el texto del artículo 7º de la ley de matrimonio civil —no para modificar su sentido, sino para hacerlo más explícito, según veremos más adelante— sin necesidad de instaurar el divorcio absoluto en la Argentina. Sorprende, pues, que este problema no haya sido ya resuelto, y sorprende que se perturbe la solución con la vieja querella entre divorcistas y antidivorcistas.

Ni divorcistas ni antidivorcistas pueden tomar partido —como tales— en esta ocasión, porque no está en discusión la reforma ni menos la abrogación del principio de la indisolubilidad del vínculo conyugal, que quedaría intacto para nuestra legislación dentro del territorio de nuestro país. Con su eterna disputa vendrían a interferir y complicar ellos, una solución ajena a sus banderías.

Tal ha sido el error de los que contemplaron este problema entre nosotros en función de su divorcismo: buscar soluciones generales para un problema especial, soluciones extremistas, heroicas, para un problema en cierto modo simple —aunque trascendental— proyectando la implantación del divorcio absoluto en nuestro país.

Ese fué el error. Si la naturaleza no hace saltos en ningún orden, tampoco los hace en el derecho; y pretender que un país de tradición católica, de matrimonio indisoluble, entrañablemente consubstanciado con su tradición y su concepto de la familia, pasara de ese estado legislativo a un divorcio absoluto y fácil —hasta de mero consentimiento— era una equivocación, un absurdo. Para rectificar un detalle, demoler el edificio.

Savigni, el gran jurista alemán, al echar las bases de la escuela histórica del derecho en su ensayo *De la vocación de nuestro siglo para la legislación y el derecho*, demostró hace ya cien años, que lejos de ser una creación del Estado, la ley es un producto de la sociedad, de sus costumbres, de sus juicios y prejuicios, de su tradición; y por eso Puchta— su discípulo predilecto— pudo decir, acentuando ese concepto, que la sociedad es al derecho como la semilla a la planta; su evolución, su forma, están regidas por ritmos, por procesos inexorables.

El ejemplo más terminante lo ofrece Rusia y justamente en esta materia. Sabido es que el comunismo llegó en su fiebre revolucionaria de la primera hora, a establecer allí un divorcio sin instancia judicial alguna: cualquiera de los cónyuges comparecía al Registro Civil —quizá de paso para su ocupa-

ción cotidiana— y dejaba constancia de su voluntad de poner fin al estado matrimonial. Nada más, y asunto concluido. Pero, según nos informa Juan Cruz Goyenola, el agregado a la embajada uruguaya en Moscú, en su interesante libro *Rusia por dentro*, se ha legislado últimamente sobre divorcio, determinando las causas que lo hacen admisible y estableciendo un procedimiento judicial riguroso, con pruebas, sentencias y todos los formulismos de cualquier país burgués. Porque una nación de larga tradición como Rusia, no podía alterar —en forma estable— una institución fundamental, así, de una manera repentina, fulminante. Y agregaré, como acotación marginal, que lo mismo está sucediendo en cuanto a la propiedad privada.

Considero, pues, que el divorcio absoluto es un problema delicado, complejo, muy grave; que habrá que estudiar mucho antes de tomar cualquier determinación; y definiendo, aun más, mi posición en la materia, agregaré que la estabilidad de la familia, su refirmitación y consolidación, es más necesaria que en los viejos países, en estos países nuevos, de inmigración, de gente inestable —algo transeúnte— y que alguien ha comparado —pintorescamente— con esas sociedades adventicias que se forman en los transatlánticos al azar de los largos viajes.

El caso es que ante la deficiencia de nuestra legislación, se ha ido a buscar en el extranjero la solución de situaciones domésticas insostenibles, improrrogables. Eso mismo y sobre todo su frecuencia y abundancia, revela que hay una necesidad social insatisfecha, un vacío de la legislación que llenar.

Por lo demás, esta evasión no es una novedad, como tampoco es nueva esa búsqueda desesperada de la legislación más propicia para la realización de nuestras esperanzas, de nuestros sueños de felicidad. Para legislar sobre la contradicción de las distintas legislaciones en materia de matrimonio, Vélez Sársfield acudió a Story, que era la máxima autoridad de su tiempo. Cuando Story escribió su obra *Conflictos de derecho*, hacia el año 1850, el mismo problema que hoy tenemos lo tenía Inglaterra. En Inglaterra no había divorcio y sí lo había en Escocia. Era cuestión de franquear la frontera. ¿Cómo no franquearla bajo el aguijón del amor? Se producía la misma peregrinación a Escocia que hoy —desde aquí— al Uruguay o a México; la misma fuga en fraude de la ley, con la misma carga de ilusiones o decepciones, con el mismo «lío» sentimental a cuestas, en busca de una reparación, de una liberación afectiva, que a veces logra ser una verdadera resurrección vital. Problema que Inglaterra afrontó y resolvió en 1857 con una ley de divorcio originariamente muy severa, muy restringida, y que amplió —casi ochenta años más tarde— después de terminada la guerra de 1914.

Imbuído de la filosofía jurídica de Savigni, yo propongo a mi país una solución más prudente aún; más prudente que un divorcio restringido, severo: una sencilla ley de legitimación de los divorcios y matrimonios celebrados en el extranjero y de los hijos nacidos en esas uniones, dejando subsistente, empero, toda la estructura de nuestro régimen conyugal para uso interno.

El estado legislativo actual en nuestro país, es el siguiente: el artículo 7º de la ley de matrimonio civil prescribe, literalmente: «La disolución en país extranjero de un matrimonio celebrado en la Repu-

blica Argentina, aunque sea de conformidad a las leyes de aquél, si no lo fuere a las de este código, no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse. El texto parece claro, concluyente, pero se ha prestado a distintas interpretaciones. No habilita a casarse, dice el texto ¿pero dónde? Según algunos comentaristas —el profesor doctor Pablo Calatayud, entre otros, en un ciclo de conferencias titulado «El divorcio en la Argentina»,—, sostienen que la frase «no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse», significa que no los habilita para casarse en la República Argentina. Así lo entendieron también dos ilustres magistrados que eran a la vez profesores en nuestra Facultad de Derecho, como el doctor Calatayud; el doctor Alfredo Colmo («Gaceta del Foro», tomo 44, página 114) y Raimundo Salvat («Gaceta del Foro», tomo 132, página 94).

Es de lamentar que la jurisprudencia de nuestros tribunales no siguiera el rumbo que le marcaron estos dos grandes jueces. Se mantuvo cerrada, irreductible. Tanto el divorcio obtenido en país extranjero como el nuevo casamiento, han sido declarados —invariablemente— nulos, írritos y sin ningún valor, y la prole marcada —sañudamente— con la peor de las bastardías, la más reductible: la adultería.

Si nuestros jueces hubieran comprendido la misión de la jurisprudencia, su misión trascendente de crear derecho; si se hubieran mostrado más comprensivos, más liberales, menos atados al texto, ellos habrían podido solucionar este problema social mediante la susodicha interpretación del artículo 7º de la ley de matrimonio civil, sustentada por los camaristas doctores Colmo y Salvat, y este proyecto ya no tendría razón de ser.

Planiol, en la introducción a su *Tratado de Derecho Civil Francés*, hablando del papel que toca a la jurisprudencia en la elaboración del derecho, dice: «Comparado con el papel del legislador, el papel del juez parece modesto, pero en realidad es casi igual. En efecto, la ley no tiene valor, sino cuando se la aplica y según la manera cómo se la aplica. Por lo tanto, hay un hecho universal e inevitable: la interpretación de las leyes por la autoridad judicial ofrece muchas ocasiones para modificar la regla legal y, algunas veces, el juez llega legítimamente a dominar la voluntad del legislador.»

Nuestros tribunales se mantuvieron, pues, inflexibles, desconociendo una y mil veces la validez de esos divorcios y ulteriores matrimonios —detenidos, quizá, justo es reconocerlo, por ese intrincado Tratado de Montevideo, del que después nos ocuparemos— desoyendo aquella acertada reflexión del doctor Salvat, en el caso arriba citado: «Cuando los esposos o cualquiera de ellos, se casa, nuevamente, en algún país extranjero, hasta allí no llega el imperio de nuestra soberanía y, por consiguiente, de nuestra ley.»

Sea como fuere, la jurisprudencia quedó definitivamente fijada, como es sabido, en los conocidos casos tipos: *Rosemblit v. Rosemblit* («Gaceta del Foro», tomo I, pág. 193) y *Barrenechea v. Barrenechea* («Gaceta del Foro», tomo CXXXII, pág. 94), reiterada en infinidad de casos, cuya cita sería fatigosa, y tal estado de la jurisprudencia nos coloca frente a la única solución posible; la única para poder salir de esta situación: la reforma legislativa del texto del artículo 7º de la ley de matrimonio civil.

Esa reforma consiste en adoptar el siguiente texto: «La disolución en país extranjero, de un matrimonio celebrado en la República Argentina, producirá en ésta todos los efectos jurídicos, con la sola excepción de que los cónyuges no podrán volver a casarse en la Argentina.»

Se dirá que ésta es una manera evasiva, disimulada, de sancionar el divorcio absoluto en la República. Pero ello no sería exacto, puesto que la estructura del matrimonio indisoluble seguirá siendo, dentro de nuestro territorio, idéntica a la actual. Yo deseo mantener la dilucidación de este asunto al margen —como ya he dicho— de divorcismo y antidivorcismo. Pero frente a esa objeción debo decir que el divorcio absoluto cuenta en nuestro país con dos antecedentes importantes favorables: primero, el divorcio absoluto ha sido aceptado por la mayoría de la comisión reformadora del Código Civil argentino, si computamos el voto del doctor Bibiloni —que no pudo darlo en la sesión respectiva de la comisión, por haber fallecido— pero que está dado en forma rotunda en el anteproyecto; y segundo, que el divorcio absoluto ya fué aprobado, por amplia mayoría, el año 1932, por la Cámara de Diputados.

Esta ley que yo propicio, no va contra sentimientos religiosos sin duda respetables, en primer lugar porque legisla sobre los efectos jurídicos exclusivamente, después porque cabe suponer que no habrá católicos en trance de acogerse a la ley para legalizar divorcios obtenidos en el extranjero y subsiguientes matrimonios, si fueran católicos de verdad, como no los obliga tampoco a divorciarse y casarse nuevamente por su sola sanción; y por último, porque la sanción de esta ley alejará —acaso por mucho tiempo— la adopción del divorcio absoluto dentro de la legislación de nuestro país.

Es innegable que hemos experimentado en estos últimos años, cambios fundamentales en ideas y en costumbres. Basta saber que según las más recientes estadísticas hay un porcentaje apreciable —siempre creciente— de matrimonios que se celebran entre nosotros sin la bendición de la Iglesia Católica («Revista de Estadística Municipal», año LVII, número 670). He ahí un signo de una transformación social evidente: pero hay otra igualmente significativa. La emancipación de la mujer por el trabajo en el orden económico y en el orden mental por la influencia de las convulsiones europeas subsiguientes a esta guerra y a la anterior. El voto de la mujer y su incorporación a la vida pública, precipitarán una evolución decisiva y la mujer es el centro del matrimonio y de la familia, su verdadera modeladora con sus juicios y sentimientos. Asistimos al nacimiento de un nuevo mundo. Llegarán grandes transformaciones anticipadas ya por una nueva sensibilidad, por un nuevo espíritu. Pero queremos que esas transformaciones sean paulatinas, sobre todo en la organización de la familia. A eso tiende mi proyecto. Busca una solución ecléctica equidistante, como la que quería Napoleón; con gran tino político Napoleón, que en el fondo no era divorcista, buscaba el justo medio entre su preferencia conceptual y la realidad de la vida. Avanzar sin pausa y sin prisa; pero advirtamos que estamos en una pausa que dura ya sesenta años en materia de organización de la familia, de 1889, es decir, desde que se dictó la ley de matrimonio civil.

Conocida es la intervención que cupo al Primer Cónsul en la discusión del Código Civil francés. Con

trazo genial ponía fin a la controversia de los juristas, dando soluciones cabales. Al tratarse el divorcio, en la comisión respectiva, después de oír a los grandes jurisconsultos, su erudita controversia, Napoleón, dijo en síntesis magistral: «Y bien, señores, la libertad religiosa impone el divorcio, pero las buenas costumbres, impone limitarlo.» Palabras que resumen toda la dialéctica y la política de este asunto.

No sería justo argüir que esta ley contribuirá a desquiciar la familia argentina. Todo lo contrario. Sin estatuto legal que los legitime, estos matrimonios celebrados en fraude de la ley argentina, en Uruguay o en Méjico, han entrado poco a poco en nuestras costumbres, se los tolera y son socialmente admitidos en todas partes, en todos los círculos. Esa convivencia entre los matrimonios legítimos y esos «cuasimatrimonios», que son ante nuestra ley, simples concubinatos, está borrando el concepto de lo legal y de lo ilegal, de lo lícito y de lo ilícito, de lo honesto y de lo deshonesto, en cuestión tan fundamental. Porque si se admite el trato de estos concubinatos disfrazados en el seno de las familias más severas ¿cómo no se ha de admitir muy pronto la frecuentación de concubinos sin disfraz? Se ha dicho que la ley es la codificación de la moral, su fijación en normas concretas y positivas. Y si la ley no viene a legalizar pronto estas situaciones, la coexistencia, en nuestro país, de estas dos clases de matrimonio —una que lo es y otra que no lo es— está contribuyendo, más que nada, a la quiebra de la institución y al desquicio de la familia.

Sería erróneo sostener que el divorcio es un asunto que sólo interesa a las clases acomodadas de la sociedad. Una curiosa estadística practicada en Francia el año 1895, justamente a los diez años de sancionada en 1885 la reforma de la ley de divorcio, revela, por la clasificación profesional de los postulantes, que el mayor porcentaje corresponde al elemento obrero. (Carpentier, verbo: *Divorce*.) Es indudable que la tramitación del divorcio sea en el Uruguay o en México resulta en la actualidad muy onerosa, inaccesible a ciertas personas por razón de su costo; pero legitimada esta situación, serán muchos los profesionales que se dediquen en adelante a esta clase de gestiones, abaratándolas, cuando hayan perdido su actual carácter un tanto clandestino. Sería, pues, equivocado pensar que estamos procurando la atención de la Honorable Cámara con una legislación de clase, que no interesa a la masa, ni al Laborismo, partido mayoritario en la actual composición del Parlamento. Este proyecto responde a una necesidad general.

Frente a este problema social y dado el estado actual de nuestra jurisprudencia —que ya no cambiará— no hay sino un camino de orden legislativo: sancionar el divorcio absoluto o sancionar la ley que propicio. No sé si esto será un paso hacia la implantación del divorcio absoluto en nuestro país; lo que sí sé es que con este proyecto me mantengo fiel a los principios de la escuela histórica del derecho, en el plano de la filosofía jurídica, la doctrina en que se formaron nuestro máximos juristas Alberdi y Vélez Sársfield. Porque esta ley responde a una realidad social que es consecuencia de la evolución histórica y porque, cuando llegue el momento de afrontar el problema de fondo, el de la implantación del divorcio absoluto en la Argentina —si ese momento llegara— nuestra experiencia histórica estará enriquecida con los resultados de la aplicación de esta ley que viene a ser en cierto modo un ensayo.

La ley que proyecto soluciona el problema de derecho privado nacional, dándole una claridad categórica al texto del antiguo artículo 7º de la ley de matrimonio civil y soluciona también el problema de derecho internacional privado, salvando los conflictos que originaba el Tratado de Montevideo. Los países celebran tratados de derecho internacional privado precisamente para hallar fórmulas de conciliación entre sus distintas legislaciones, a veces incompatibles; pero acontece algo original con el Tratado de Montevideo que ha sido, en punto a esta materia del matrimonio y su disolución, la causa de graves complicaciones. Y acaso esté ahí, como ya dije, el obstáculo que impidió a los jueces la solución de este problema por la vía fácil de la jurisprudencia. La jurisprudencia se detuvo ante esa valla.

El artículo 13 del Tratado de Montevideo dispone que la ley del domicilio conyugal regirá la disolución del matrimonio, siempre que la causal invocada esté de acuerdo con la ley del lugar de la celebración. Si el precepto se hubiera detenido en la primera parte —como había sido proyectado— hubiera sido perfecto; pero la segunda cláusula que lo integra, vino a introducir grandes entorpecimientos en su aplicación. Se dijo que si nuestra ley no admite el divorcio como causal de disolución del vínculo, el divorcio *ad vinculum* decretado en Montevideo, era aquí inoperante, precisamente, por aplicación del tratado. Pero si el nuevo texto deja librado el punto a la ley del lugar donde se decreta el divorcio, ya no hay ni puede haber dificultades.

Por su parte, el artículo 4º del protocolo adicional del tratado, era fuente de otra dificultad. El régimen de la familia es de orden público, como se sabe. Si la ley argentina prohíbe la disolución del vínculo por divorcio, el que se obtuviera en país extranjero no podía disolver un matrimonio celebrado en la Argentina, siempre que se tratara de un país signatario del tratado. Pero si el texto que propongo deja librado el punto a la ley del lugar del divorcio, prohibiendo únicamente el nuevo casamiento en la Argentina, ya no hay principio de orden público en juego, y toda cuestión queda evitada.

Así lo entendieron, por lo demás, dos ilustrados antecesores míos: los diputados Federico Pinedo y Ramón J. Cárcano autores ambos de sendos proyectos, presentados en los años 1914 y 1920, respectivamente; proyectos que, salvo diferencias de redacción, son análogos a éste que hoy entrego a la deliberación de la Honorable Cámara. El uno, un destacado hombre de ley y el otro un gran hombre de mundo, un historiador, un sociólogo, intenso escrutador de nuestras cosas, acaso, vió de cerca en su larga vida, alguna de esas situaciones dramáticas, sin salida, como tantas otras semejantes, provocadas por una deficiencia de nuestra legislación. Coincidencia significativa la de estos dos hombres de formación ideológica tan distinta y de tan distinta generación. Ella, además de mis convicciones formadas en el estudio y en el extenso ejercicio de mi profesión, me deciden en esta emergencia, consciente de la responsabilidad que asumo al abordar un asunto tan propenso a despertar alarmas —en este caso infundadas— y a la incomprensión por los sentimientos de diversa índole que entorpecen el debate puramente jurídico.